

# FICHA DE FORMACIÓN 178

## Hilo Negro



*Otra vuelta de tuerca en el negocio de la muerte en las fronteras*

## El desmantelamiento programado de Salvamento Marítimo como servicio público

Durante este verano hemos asistido a un nuevo capítulo de la macabra representación teatral en la que los partidos políticos europeos, y de otros países, intentan disputarse sus cuotas de poder a costa de la vida y de la dignidad de millones de personas migrantes. La crueldad e hipocresía van en aumento, pero no podemos decir que nos sorprenda. A lo largo de la historia las potencias coloniales han usado su poder para regular las migraciones según conviniera al capital y para manipular a la opinión pública de manera que justificara, o incluso demandara, las medidas consiguientes, oscilando entre el paternalismo caritativo y el más crudo discurso de odio y miedo.

Conviene recordar cómo, en las primeras fases de la colonización, se facilitó el expolio de las tierras y el desplazamiento de las poblaciones indígenas de los países invadidos para entregárselas a migrantes europeos que, por millones, se instalaron en las colonias y a su vez se impusieron tributos y se idearon otros mecanismos para obligar a la población autóctona a ofrecer su trabajo en régimen de semiesclavitud. Posteriormente, durante el siglo XX, el flujo se facilitó en las dos direcciones, en función de las necesidades de “recursos” humanos: como carne de cañón para las dos guerras mundiales, como trabajadores dóciles para romper la fuerza del movi-

miento obrero europeo, para suplir a los trabajadores muertos en ambas contiendas y, recientemente, para disponer de mano de obra sobrante y sumisa en los sectores laborales más precarizados.

Los países que habían sido receptores de migrantes durante “los treinta gloriosos” años de expansión económica tras la segunda guerra mundial comienzan a establecer restricciones a partir de la crisis energética de los años 70. Durante la década siguiente, el debate sobre la libre circulación de las personas en Europa incluye, para algunos, a todos los seres humanos. Pero finalmente se imponen las tesis neoliberales en casi todo el mundo y, mientras que se promueve e impone por la fuerza en muchos casos la libre circulación de capital y mercancías, se establecen restricciones cada vez mayores a la libre circulación de las personas. Concretamente de las personas pobres y racializadas, puesto que la minoría privilegiada blanca puede seguir viajando y estableciendo residencia prácticamente sin cortapisas.

A partir de ese momento los migrantes, que iban y venían libremente de sus lugares de origen según la situación laboral y personal se lo aconsejara, empiezan a verse atrapados en situaciones precarias de las que no pueden salir, tanto en Europa como en sus países, desestabilizados y empobrecidos por las políticas salvajes del FMI y el Banco

---

Mundial y por la cadena de golpes de estado provocados contra cualquier intento de emancipación frente al neocolonialismo.

En el caso de España, que por su situación económica había sido origen de migraciones, y no destino, la situación empieza a cambiar también en los años 80 coincidiendo con la entrada a lo que entonces era la CEE. En el año 1985 el gobierno del PSOE aprueba la primera ley de extranjería, criticada como la más dura de toda Europa y convierte a España en lo que hoy son Marruecos, Turquía u otros países: el fiel perro guardián de la fortaleza europea. Esta primera ley vio varios de sus artículos anulados puesto que pretendía restringir derechos fundamentales como el derecho a reunión y asociación y permitía el encarcelamiento sin restricciones de personas indocumentadas.

Sin embargo, la llegada de inmigrantes en España sigue siendo muy limitada hasta mediados los años 90, cuando las políticas neoliberales combinadas con el brusco descenso de nacimientos hacen necesaria una gran entrada de personas para permitir las grandes burbujas de la construcción, el agonegocio... Durante esta fase la tasa de inmigración en España se convirtió en pocos años en una de las más altas del mundo. Los discursos alternaron entre la presentación de la migración como (utilitariamente) positiva y su deshumanización y utilización en campañas de marketing electoral. A la vez que se presentaba como necesaria, no dejaban de justificarse las restricciones de derechos y el control de la entrada de personas migrantes asociándolo de forma más o menos sutil con control de mafias, terrorismo...

La entrada en vigor del área de Schengen, la campaña de justificación de las guerras “contra el terrorismo” y la crisis provocada por el estallido de las burbujas financieras y del ladrillo intensifican el control represivo de la migración y la progresiva normalización de los discursos de odio y miedo.

A pesar de que es fácil comprobar cómo el efecto llamada viene dado por la existencia de una demanda de trabajadores en precario para ciertos sectores y que el sentido de las migraciones se ha invertido en los años de crisis, se ha ido normalizando la muerte de miles de personas con la mediatización de “crisis migratorias”. A medida que empiezan a tomarse medidas restrictivas, las rutas migratorias se van haciendo más peligrosas y mortales. A mediados de los años 2000, se empieza a externalizar el control de fronteras y a establecerse un formidable negocio en torno al dispositivo. Hasta la “crisis de los cayucos” de 2006, las entradas de migrantes habían sido ya importantes pero no se habían registrado apenas muertes. En ese momento empieza a intervenir Frontex, que pasa de un presupuesto de 6 millones de euros en 2005 a 250 en la actualidad. El Plan África del gobierno Zapatero permite el desvío de millones de euros teóricamente destinados a ayuda al desarrollo al refuerzo policial de los países del Sahel. Se financian campos de concentración de migrantes en condiciones especialmente indignas en Mauritania (Guantanamo) y se va intensificando la cooperación militar y policial con todos los países del Sahel y del

norte de África, combinando control migratorio con la “lucha contra el yihadismo”. En un claro ejercicio de neolengua, el “Fondo Europeo de Apoyo a la Paz” pretende destinar 10500 millones de euros a acción militar, especialmente en esta zona. Esto se suma a los 6000 millones de euros transferidos a Turquía recientemente y las cantidades cada vez mayores que reclama Marruecos, y España en su nombre, para reforzar el maltrato al que somete a los migrantes subsaharianos.

Cabe destacar que, a lo largo de todo el proceso, las políticas de los diferentes partidos en el poder (no sólo en España) han sido muy similares pero envueltas en retóricas diferenciadas en lo que parece una clara estrategia de segmentación del “mercado electoral”.

En este contexto, parece que ese mercado electoral ya no demanda la labor que venía realizando Salvamento Marítimo, que es un cuerpo civil dependiente del Ministerio de Fomento, único público en la Unión Europea. Se creó en 1993, pero durante los primeros años funcionó de forma externalizada. Fue la crisis del Prestige de 2002 la que supuso su creación como empresa pública por las acusaciones de falta de coordinación al gobierno. En 2012, cuando se cierran todas las empresas privadas de capital público pasa a depender del Ministerio de Fomento. Los trabajadores de sus embarcaciones pasan a ser contratadas bajo el concepto de “fijos a extinguir”, una modalidad contractual sin precedentes en la Administración y que les mantiene en un limbo de inseguridad.

CGT, que es mayoritaria en Salvamento Marítimo, ha venido denunciando la falta de renovación y precariedad de la plantilla, la imperiosa necesidad de refuerzos, el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y de rescate y los intentos de militarización que el año pasado se tradujeron en el traspaso de la coordinación al mando único de la Guardia Civil.

También se ha denunciado que en 2019 se ha dejado de informar públicamente de las embarcaciones en riesgo y que están siendo rescatadas. El PSOE ha oscilado entre la mediatización de gestos aparentemente solidarios y lo que parecía una intención inicial de oenegizar las labores de salvamento mediante la colaboración con Open Arms al inicio de su mandato y los intentos de criminalizar a estos últimos, como lo ha hecho con activistas como Helena Maleno, que venía colaborando con Salvamento Marítimo en las labores de rescate, ante la falta de radares y medios necesarios de este organismo y que ha sido hostigada y encausada en Marruecos por denuncias de la policía española a pesar de que fueron archivadas por la fiscalía.

Parece claro que lo que no desea el PSOE, ni ningún otro gobierno, es la existencia de ciudadanos y trabajadores lo suficientemente libres y formados para poder documentar el genocidio que tiene lugar en nuestras costas para poder mantener el negocio de algunas empresas europeas y justificar el continuo incremento de la estructura policial y militar dentro y fuera de nuestras fronteras ◀◀

---